

San Carlos, el pueblo que le ganó a la guerra

Por:

María Patricia Giraldo Ramírez
Estudiante Maestría en Gobierno

Juliana Zuluaga Tamayo
Comunicadora social -Periodista
Estudiante Especialización en Relaciones Públicas





18.363 personas abandonaron el municipio de San Carlos, oriente de Antioquia, entre 1996 y 2005, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como resultado de los enfrentamientos entre el frente noveno de las Farc que desde los años 80 llegó a esta región y los paramilitares del Bloque Metro que a mediados de los noventa entraron a disputar el territorio.

Dice también el informe de esta entidad, que durante casi diez años hubo más de 600 homicidios, al menos 180 víctimas de minas antipersonal, un promedio de 350 personas desaparecidas y 33 masacres.

Durante este tiempo, María Patricia Giraldo abandonó la finca donde creció para llegar a Medellín huyendo del horror de la guerra que desangró su pueblo. Ella se dedicó a trabajar y a estudiar derecho y en 2007 regresó a servir a su natal San Carlos como personera encargada y al año siguiente fue nombrada personera titular, cargo en el que permaneció por tres años. Su perseverancia la llevó a la Alcaldía de esa localidad, cargo que ganó por una diferencia de 48 votos. Pero la verdadera diferencia la hizo con su equipo de trabajo durante los cuatro años de su gestión (2012-2015), al convertirse, con 30 años, en la primera mujer en llegar a este puesto en ese municipio y en la alcaldesa más joven de Antioquia.

Su primer objetivo fue apoyar a las víctimas del conflicto armado de su Municipio para que accedieran a sus derechos y después, las metas fueron cada vez mayores. Ningún reto fue

inferior a su capacidad de gestión que llevó a que en 2012, San Carlos fuera declarado como el primer municipio del país libre de sospecha de minas antipersonal, gracias a la desactivación de artefactos explosivos. Ese mismo año comenzó el proceso de restitución de tierras que ya ha beneficiado al menos a 600 víctimas.

Eso no fue todo, la tranquilidad que se comenzó a evidenciar permitió que de forma voluntaria regresaran familias a ocupar los espacios que la violencia les había arrebatado años atrás, hecho que se fortaleció con la aprobación de la ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, porque hizo de los planes de retorno, una política estatal. Esto ha permitido el regreso de más de 14.500 personas a esta localidad del oriente antioqueño. Además, según la Unidad de Restitución de Tierras, allí también han sido invertidos \$2.200 millones en proyectos productivos que han beneficiado a 80 familias.

Todas estas iniciativas han hecho del municipio de San Carlos un laboratorio de paz y un verdadero ejemplo de resiliencia que le ha valido, incluso, reconocimientos mundiales.

A continuación, la opinión de María Patricia Giraldo, estudiante de la Maestría en Gobierno de la Universidad de Medellín y ex alcaldesa del municipio de San Carlos. Ella cuenta su experiencia para recuperar la confianza del pueblo y en cómo dio avanzados pasos en procesos de reconciliación en esta localidad del oriente antioqueño.

Retos de la construcción de paz territorial en Colombia

El conflicto armado en Colombia se ha prolongado por varias generaciones y sobre el origen de este, no hay una respuesta única que permita poner de acuerdo a quienes han debatido y escrito sobre el tema. Devolvernos en la historia es importante para entender el origen de esta guerra y aunque los académicos no han podido ponerse de acuerdo en algunas cosas, sí coinciden en identificar la tenencia de la tierra como un eje fundamental para su comprensión (ya que la propiedad o tenencia de la misma está claramente relacionada con tres necesidades básicas: vivienda, alimentación y trabajo/ingreso).

Hay que entender que en la medida en que el Estado no garantiza la satisfacción de las necesidades ni genera oportunidades, posibilita escenarios en los que se puede pensar que legitima el derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo, da luces para comprender el nacimiento de la insurgencia y los primeros enfrentamientos violentos a raíz de esa lucha. Es importante también reconocer que el Estado no solo ha fallado en estas garantías también ha sido incapaz para ofrecer una protección efectiva en los territorios, permitiendo la construcción de estructuras ilegales alternas de poder a partir de un centralismo arraigado que no permite la planeación y la participación de los ciudadanos en lo que a ellos les compete solucionar en sus regiones y localidades. Estas variables sumadas a otras configuraron las dinámicas para que aparecieran en escena, grupos insurgentes, tanto guerrilleros

como paramilitares, que quisieran redefinir las relaciones entre el centro y la periferia.

Y es que después de ver el sufrimiento, la tragedia, dolor y muerte que ha dejado esta violencia de más de 52 años, queda demostrado que la vía de las armas no es la solución a un problema que tocó fondo hace tantos años. Un paso fundamental que dio el Gobierno de Juan Manuel Santos para dar inicio a los diálogos con las guerrillas, fue reconocer que en Colombia existía un conflicto armado interno que tiene unas causas que deben ser solucionadas por la vía del diálogo en el contexto social y político que está viviendo el país.

Nuestro conflicto no es por ausencia de una ley que regule las relaciones entre los ciudadanos, o de autoridad, es porque el Estado Colombiano no ha podido en décadas definir un sistema adecuado para el uso y tenencia de la tierra.

Los acuerdos de terminación del conflicto armado nos ponen ante una nueva realidad y es la posibilidad de materializar la construcción de paz en los territorios, llevando a cabo una verdadera política de desarrollo rural, la solución del tema de drogas ilícitas y por ende el narcotráfico, permitir una verdadera participación política y social, así como brindar a la víctimas reparación, verdad, justicia y no repetición. Esto sumado a una buena política pública de reintegración de los excombatientes a la vida civil, podrá llevar a Colombia a una nueva dinámica social.

Los colombianos necesitamos entender los retos que tenemos como sociedad, en ayudar a la construcción de un escenario propicio para el posconflicto pensando en nuestras presentes y futuras generaciones. Las comunidades deberán estar capaci-

tadas y formadas para hacer ejercicios participativos y en ellos tomar las mejores decisiones para sus territorios.

La paz territorial debe ser entendida como una nueva forma de vida para habitar los territorios y el territorio como una construcción ciudadana.

Hoy el reto está puesto en la Administración de justicia, en mejorar la seguridad y convivencia, y en una nueva oportunidad para transformar la democracia colombiana, cerrar las brechas de inequidad y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Hay que cuidar que algunos territorios no se conviertan en fuentes de economías criminales, ni de grupos de crimen organizado y que los fenómenos de corrupción que generan desconfianza puedan por fin desaparecer y se recupere la credibilidad a través del manejo honesto de los recursos públicos.

El posconflicto necesita unos líderes políticos, con más liderazgo social, que asuman el gran reto de la construcción de la paz territorial, pues los colombianos en cada Departamento y Municipio tienen la esperanza de un país con oportunidades e inclusión para contrarrestar la desconfianza en las entidades públicas y el descontento por la inequidad que es donde reside la violencia. Un país donde los líderes de los territorios, alcaldes, alcaldesas, gobernadores y demás dirigentes, asuman el reto de ejercer su liderazgo político, con mayor impacto social en sus localidades, que se fundamenten más en la honestidad que en la mentira, en la meritocracia que en el amiguismo, que cultiven más la reconciliación que los odios, que dediquen más tiempo a la gestión y articulación que a la popularidad, que promuevan las alianzas público-privadas, que prevalezca el diálogo y la ver-

dad sobre la promesa incierta, que generen gobiernos donde su eje fundamental sea la participación, que fortalezcan la seguridad recuperando la confianza entre los ciudadanos y la fuerza pública, que inviertan en planificación y ordenamiento de sus territorios, que trabajen por saldar la deuda social que la clase política tiene con este país y sus regiones.

El líder político con verdadero liderazgo social debe brindar al reintegrado oportunidades para construir su proyecto de vida, posicionar la mujer como actor político, reparar a las víctimas de manera integral con enfoque transformador, generar espacios para la inclusión social, ayudar en ejercicios de memoria como construcción social. Esto permite reflexionar sobre los hechos de violencia que ocurrieron en el territorio, que hubo vulneración a los derechos fundamentales que afectaron la vida personal y colectiva de las comunidades.

En Colombia tenemos hoy experiencias exitosas de construcción de paz territorial, donde se han logrado grandes resultados, con la articulación de varias instituciones público-privadas y la consolidación de la seguridad, la participación ciudadana, el retorno y el desminado.

Después de firmado el acuerdo entre Gobierno y Farc, lo que se sigue es poner en manos de buenos y grandes líderes la responsabilidad de coordinar todas las gestiones y acciones en su territorios que puedan permitir la real construcción de una paz estable y duradera, para que las esperanzas de los colombianos no queden frustradas ante unos acuerdos con mucho contenido pero con poca o nada de materialización en los territorios.